



FORMALIZA ACUERDO DEL CONSEJO DE ESTÁNDARES Y ACREDITACIÓN REFERIDO A LA APROBACIÓN Y RECHAZO DE LAS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN PARA MEDIADORES PENALES JUVENIL REGIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 010/2024

SANTIAGO, 10 de enero de 2024

VISTO: Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N°100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N°18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; en la ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y adolescencia; en la ley N°21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, e introduce modificaciones a la ley N°20.084, sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes, y a otras normas que indica; en el decreto N° 22, de 2023, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que nombra a persona que indica en el cargo de Directora Nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; en la resolución exenta N°039/2023, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que formaliza el acuerdo del consejo de estándares y acreditación referido a la aprobación de estándares de acreditación para personas naturales, en los términos que indica; en el acta de acuerdo de la Secretaría Ejecutiva (s) del Consejo de Estándares y Acreditación que contiene el resultado del proceso de acreditación para Mediadores Penales Regionales, para implementar el programa de Mediación Penal Juvenil; en la resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón, en las demás normas vigentes, pertinentes y aplicables, y;

CONSIDERANDO

Que, la ley N°21.527 crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en adelante el Servicio, como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que, el artículo 2° de la citada ley, en cuanto a su objeto, establece que el Servicio es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley N°20.084, mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, a la integración social de los sujetos de su atención y a la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia;

Que, el literal b) del artículo 13 de la Ley prescribe que corresponderá al Servicio ejecutar, directamente o a través de organismos acreditados las medidas y sanciones aplicadas a los sujetos de atención en conformidad a la ley N°20.084, conforme al modelo de intervención a que se refiere el Título II de la Ley;

Que, el artículo 29 de la Ley, prescribe que el Servicio establecerá un modelo de intervención de aplicación nacional y vinculante para la ejecución de las sanciones y medidas, entendiéndose por tal un conjunto estructurado de acciones especializadas basadas en prácticas efectivas orientadas a modificar la conducta delictiva y a



incidir en la plena integración social de los sujetos de atención del Servicio, el que deberá constar en una resolución dictada por el Director Nacional del Servicio;

Que, dicho modelo deberá considerar acciones desde la dictación de la sanción o medida por el tribunal hasta el acompañamiento voluntario posterior al egreso, conforme dispone la Ley, orientado a dar cumplimiento a los objetivos dispuestos por el artículo 20 de la ley N°20.084, esto es, hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social. Asimismo, en el modelo de intervención se deberán establecer medidas eficaces para adecuar sus disposiciones y acciones a los sujetos de atención infractores con discapacidad;

Que, toda intervención que se realice en el marco del modelo de intervención ya señalado, deberá centrarse en el sujeto de atención del Servicio, orientándose a la satisfacción de los fines ya descritos de forma tal que este último deberá orientar toda su gestión destinada a su implementación, control, seguimiento de casos y demás pertinentes, en el mismo sentido;

Que, a su turno, el artículo 35 de la Ley, regula los estándares para la aplicación del Modelo, estableciendo que el sistema de ejecución de programas contemplará un conjunto de estándares que se aplicarán a la ejecución de medidas y sanciones, tanto privativas de libertad como de ejecución en el medio libre;

Que, en este sentido, los incisos primero y segundo del artículo 36 de la Ley, establecen que para la aplicación del modelo de intervención previamente señalado y el cumplimiento de sus funciones, el Servicio podrá contratar los servicios de organismos externos que no tengan fines de lucro y de personas naturales, ambos debidamente acreditados para tal efecto. Dicha acreditación se realizará por el Consejo de Estándares y Acreditación de conformidad a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley;

Que, el citado artículo 17 en sus literales a) y b) respectivamente establecen que corresponde al Consejo de Estándares y Acreditación, aprobar previa propuesta del Director Nacional, los estándares de funcionamiento para los programas relacionados con la ejecución de las medidas y sanciones de la ley N°20.084, así como las mediaciones, y los estándares de acreditación para los organismos y personas naturales, en su caso, que administren los programas referidos en el literal anterior. Le corresponderá, además, según los literales d) y e), respectivamente, acreditar los programas relacionados con la ejecución de las medidas y sanciones de la ley N° 20.084, así como las mediaciones, como también declarar la pérdida de dicha acreditación; y acreditar a las personas naturales que presten servicios y declarar la pérdida de dicha acreditación, en conformidad a lo dispuesto por la ley y el reglamento establecido en el inciso segundo del artículo 54;

Que, cabe considerar también que el artículo 35 ter de la ley N°20.084 incorporado por la ley N°21.527, prescribe que las causas en que fuere procedente la suspensión condicional del procedimiento, el acuerdo reparatorio o el principio de oportunidad se podrán derivar a mediación, siempre y cuando la víctima y el imputado consientan libre y voluntariamente en someter el conflicto a dicha instancia. La intervención y permanencia en el mismo será, igualmente, personal y voluntaria, en todo momento. Agrega que, se entiende por mediación la realización de un proceso restaurativo y especializado, en virtud del cual la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador;

Que, a su turno el artículo 35 quinquies de la citada ley N°20.084, prescribe que en todo caso, también podrá ser derivado a mediación un proceso que no cumpla con las exigencias señaladas en los incisos primero y sexto del artículo 35 ter, a solicitud de la víctima, con consentimiento libre e informado del imputado y autorizado por el juez de garantía competente, y cumpliéndose las demás exigencias legales. En dicho caso, la derivación no suspende el curso del proceso, salvo en los delitos del inciso sexto del artículo 35 ter, respecto de los cuales aquél no podrá suspenderse;



Que, bajo dicho contexto, los incisos primero y segundo del artículo 35 septies de la ley N°20.084 establece que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil dispondrá de un programa especial de mediación penal, integrado por mediadores públicos o contratados de conformidad a la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, agregando que dichos mediadores deberán encontrarse acreditados en un Registro de Mediadores Penales, cuyo procedimiento, requisitos de ingreso y permanencia, supervisión y sanción, así como también las causales de eliminación del Registro, se establecerán a través de un Reglamento, agregando su inciso tercero que para inscribirse en el Registro del inciso anterior, se requerirá poseer título profesional de una carrera universitaria que tenga, al menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste; acreditar formación especializada en mediación y en materias de infancia, adolescencia, victimología, proceso penal juvenil y justicia restaurativa, y no haber sido condenada por crimen o simple delito, por maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 8° de la ley N° 20.066, o sancionada por la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Dado lo anterior, podrán acreditarse como mediadores, personas naturales que cumplan con los requisitos legales y los estándares de acreditación que se encuentren vigentes;

Que, en este sentido, mediante resolución exenta N°039, de fecha 28 de noviembre de 2023, de este origen, se formalizó el acuerdo del Consejo de Estándares y Acreditación referido a la aprobación de estándares de acreditación para personas naturales, en los términos que indica;

Que, por lo anterior, con fecha 08 de enero del presente año, en sesión convocada para tal efecto, el Consejo de Estándares y Acreditación procedió a efectuar la votación de las solicitudes de acreditación de mediadores penales regionales, para implementar el programa de Mediación Penal Juvenil en las regiones de la macrozona norte de país, en los términos informados por la secretaria ejecutiva (S) en acta de acuerdo de fecha 09 de enero de 2024;

Que, en este contexto, según da cuenta el referido informe, el Consejo de Estándares y Acreditación, aprobó por unanimidad 3 solicitudes, resolviendo rechazar dos, por no cumplir con los estándares de acreditación aprobados por el Consejo, y cuyos fundamentos se encuentran contenidos en el Acta de Acuerdo remitido por la Secretaria Ejecutiva (S) con fecha 09 de enero de 2024, y que se entiende formar integrante de la presente resolución;

Que, dichos mediadores penales juveniles corresponden a funcionarios del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que se encontrarán autorizados para ejecutar dicho programa en la medida que cuenten con la correspondiente acreditación;

Que, por lo anterior, corresponde dictar el presente acto administrativo que formaliza el acuerdo del Consejo de Estándares y Acreditación adoptado el 08 de enero de 2024, en virtud del cual se pronuncia respecto a la aprobación o rechazo de las solicitudes de acreditación presentadas, por tanto;

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: FORMALÍZASE el acuerdo adoptado por el Consejo de Estándares y Acreditación con fecha 08 de enero de 2024, referido a la aprobación de las solicitudes de acreditación por un período de tres años contados desde la notificación del presente acto administrativo, renovable por igual período de forma consecutiva, siempre que se mantenga el cumplimiento de los estándares fijados para tal efecto, en los términos dispuesto por el reglamento a que refiere inciso final del artículo 54 de la ley N°21.527, de las siguientes solicitudes:



Nombre	RUN	Dirección Regional	Profesión
Juan Carlos Vega Fernández	XX.XXX.XXX-X	COQUIMBO	Asistente Social
Paola Valeria Piazzoli Neyra	XX.XXX.XXX-X	ATACAMA	Asistente Social
Paola Andrea Aedo Peralta	XX.XXX.XXX-X	ANTOFAGASTA	Asistente Social

ARTÍCULO SEGUNDO: FORMALÍZASE el acuerdo adoptado por el Consejo de Estándares y Acreditación con fecha 08 de enero de 2024, referido al rechazo de las solicitudes de acreditación de las siguientes solicitudes, por no cumplir con los estándares de acreditación previamente aprobados, por los fundamentos indicados en el Acta de Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva (S), y que se entiende formar parte del presente acto administrativo:

Nombre	RUN	Dirección Regional	Profesión
Olivia Soledad Rodríguez Altamirano	XX.XXX.XXX-X	ARICA	Trabajadora Social
Oscar Pablo Arqueros Naranjos	XX.XXX.XXX-X	TARAPACÁ	Abogado

ARTÍCULO TERCERO: REMÍTASE copia de la presente resolución al Consejo de Estándares y Acreditación.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE, a las personas naturales solicitantes que se indica vía correo electrónico la presente resolución exenta.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



**ROCÍO FAÜNDEZ GARCÍA
DIRECTORA NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL**

[Handwritten signature]
Distribución:

- Consejo de Estándares y Acreditación, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
- Archivo SNRSJ



ACTA DE ACUERDO QUE CONTIENE EL RESULTADO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA MEDIADORES PENALES REGIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN PENAL JUVENIL.

Martes, 09 de ENERO de 2024

A : Rocío Faúndez García, directora nacional SNRSJ.

DE : Cristina Menaque Muñoz, Secretaria Ejecutiva del CEA (S).

ASUNTO : Resultados de la votación de las solicitudes de acreditación presentadas en el marco del proceso de acreditación para Mediadores Penales Regionales.

Es grato dirigirme a usted, para comunicarle el resultado de la votación realizada por el Consejo de Estándares y Acreditación en sesión ordinaria programada según el plan de trabajo acordado para el día 08 de enero de 2024 y que se desarrolló con la asistencia de todos miembros.

La sesión se llevó a cabo en dependencias del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Antecedentes:

Que, el artículo 2° de la ley N°21.527, en cuanto a su objeto, establece que el Servicio es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley N°20.084, mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, a la integración social de los sujetos de su atención y a la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia;

Que, el literal b) del artículo 13 de la Ley prescribe que corresponderá al Servicio ejecutar, directamente o a través de organismos acreditados las medidas y sanciones aplicadas a los sujetos de atención en conformidad a la ley N°20.084, conforme al modelo de intervención a que se refiere el Título II de la Ley;

Que, el sistema de ejecución de programas contemplará un conjunto de estándares que se aplicarán a la ejecución de medidas y sanciones, tanto privativas de libertad como de ejecución en el medio libre. Los estándares son definiciones de los niveles de exigencia de las prestaciones que deben desarrollarse a nivel de todo el territorio nacional, correspondiéndole al Servicio la elaboración de los estándares de calidad fijados para cada programa, los que serán aprobados por el Consejo de Estándares y Acreditación;

Que, de conformidad a lo prescrito por los incisos primero y segundo del artículo 36 de la Ley, para la aplicación del modelo de intervención previamente señalado y el cumplimiento de sus funciones, el Servicio podrá contratar los servicios de organismos externos que no tengan fines de lucro y de personas naturales, ambos debidamente acreditados para tal efecto.

Que, de acuerdo a lo anterior, el proceso de acreditación para personas naturales se enmarca dentro de las innovaciones que propone el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en el ámbito del sistema de justicia criminal juvenil, especialmente a la ley de responsabilidad penal adolescente, asumiendo los principios de la justicia restaurativa

como uno de los modelos orientadores y con carácter pionero en la historia del país, adoptando dentro de sus fundamentos la creación de un programa de mediación penal como medida de diversificación reconocida.

Esta iniciativa abre un espacio importante para la inclusión de la perspectiva restaurativa en la justicia penal juvenil, como una vía alternativa para la resolución del conflicto penal, orientada principalmente a lograr un acuerdo reparatorio entre víctima y ofensor, con la finalidad de evitar la judicialización y promover la selectividad del sistema de enjuiciamiento penal hacia ofensas de mayor gravedad. Lo anterior, en concordancia con los fines del sistema penal adolescente previsto en la ley N° 20.084 y del derecho internacional de los derechos humanos de la infancia y la juventud, particularmente la convención internacional sobre Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales pertinentes. Asimismo, concordantes con los principios sobre reparación a las víctimas, previsto en el propio Código Procesal Penal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así, podrán acreditarse como mediadores, personas naturales que cumplan con los requisitos legales y los estándares de acreditación que se encuentren vigentes.

Que, en este sentido y mediante resolución exenta N°039, de fecha 28 de noviembre de 2023, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, formalizó el acuerdo del Consejo de Estándares y Acreditación referido a la aprobación de estándares de acreditación para personas naturales, en los términos que indica, y mediante resolución exenta N° 040 de fecha 29 de noviembre de 2023, se autorizó el llamado público a presentar solicitudes para obtener la calidad de mediador acreditado del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, para implementar el programa de mediación penal juvenil dispuesto para este fin, en los términos que indica;

A continuación, se lleva a cabo la votación a viva voz de las solicitudes presentadas de acuerdo a la regla contenida en el artículo 21 inciso 2° de la ley N°21.527, esto es **“Los acuerdos del Consejo serán adoptados por mayoría absoluta de sus integrantes, esto es, por al menos tres votos”**.

En este contexto, se detalla a continuación el listado de las personas naturales que resultaron acreditadas por votación UNÁNIME del consejo, para ejecutar el Programa de Mediación Penal Juvenil en las regiones de la macrozona norte por cuanto cumplieron con los estándares aprobados en la resolución exenta N°039, de fecha 28 de noviembre de 2023, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil:

Nombre	RUN	Dirección Regional	Profesión
Juan Carlos Vega Fernández	[REDACTED]	COQUIMBO	Asistente Social
Paola Valeria Piazzoli Neyra	[REDACTED]	ATACAMA	Asistente Social
Paola Andrea Aedo Peralta	[REDACTED]	ANTOFAGASTA	Asistente Social

Listado de solicitudes que resultaron no acreditadas por votación UNÁNIME del consejo, por cuando no cumplen con los estándares aprobados en la resolución exenta N°039, de fecha 28 de noviembre de 2023, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de acuerdo a los siguientes fundamentos:

Nombre	RUN	Dirección Regional	Profesión	Resultado de acreditación
Olivia Soledad Rodríguez Altamirano	[REDACTED]	ARICA	Trabajadora Social	No acreditado: Estándar incumplido: "Dos años de experiencia como profesional mediador/a." Medio de verificación: Certificado de trabajo expedido por un organismo público o privado con competencias en mediación familiar, escolar, de salud o financiera, en que el/la postulante a mediador/a haya ejercido en actividades de mediación. Los certificados que

				<p>acrediten experiencia laboral deberán presentarse firmados y con un número de teléfono y mail de la persona que suscribe para su posterior verificación, asimismo deben indicar las funciones realizadas por el solicitante y el periodo en que se desempeñó en éstas (mes y año).</p> <p>Revisados los antecedentes, el CEA resuelve que, el documento que presenta el solicitante no da cuenta de la experiencia en mediación, no se explicita que ésta sea una práctica principal y recurrente con una metodología específica, por lo tanto, no cumple con los requisitos para acreditar los años de experiencia requerido.</p>
Oscar Pablo Arqueros Naranjos	19992041	TARAPACÁ	Abogado	<p>No acreditado:</p> <p>Estándar que no cumple: "Dos años de experiencia como profesional mediador/a."</p> <p>Medio de verificación: Certificado de trabajo expedido por un organismo público o privado con competencias en mediación familiar, escolar, de salud o financiera, en que el/la postulante a mediador/a haya ejercido en actividades de mediación. Los certificados que acrediten experiencia laboral deberán presentarse firmados y con un número de teléfono y mail de la persona que suscribe para su posterior verificación, asimismo deben indicar las funciones realizadas por el solicitante y el periodo en que se desempeñó en éstas (mes y año).</p> <p>Revisados los antecedentes, el CEA resuelve que, el documento que presenta corresponde a un certificado laboral que no cumple con los requisitos descritos en el medio de verificación, esto es, "<i>expedido por un organismo público o privado con competencias en mediación familiar, escolar, de salud o financiera, en que el/la postulante a mediador/a haya ejercido en actividades de mediación</i>". Por otro lado, tampoco da cuenta de los años de experiencia exigidos.</p>

Sin otro particular y en atención a lo expuesto, solicito a usted la elaboración del acto administrativo respectivo.



[Handwritten signature]

CRISTINA MENAIQUE MUÑOZ
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE ESTÁNDARES Y ACREDITACIÓN (S)
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL